Sabaté Irene

Del país de los propietarios al país de los sobre-endeudados: reciprocidad, solidaridad y proyectos de transformación sistémica en tiempos de crisis

Palabras clave: sobre-endeudamiento, vivienda, ejecuciones hipotecarias, reciprocidad, crisis económica

DOI: 10.4312/ars.8.1.167-187

1 Introducción

El considerable aumento de los procesos de ejecución hipotecaria registrados en España durante la actual crisis económica¹ constituye un problema social, económico y político de primer orden que está atrayendo la atención de expertos económicos y jurídicos, legisladores y activistas. Por su parte, la perspectiva antropológica permite analizar el fenómeno como una transgresión –masiva y forzosa– de la obligación de devolver que se halla implícita en las relaciones de deuda y crédito (Graeber, 2011) y que constituye un factor clave de disciplinamiento y jerarquización social en un momento en que el endeudamiento se presenta como la condición «natural» de ciudadanos, empresas y Estados (Lazzarato, 2011). Así pues, la transgresión de la obligación de devolver, situada en el contexto específico del capitalismo financiero contemporáneo –a diferencia de lo observado en otras sociedades y momentos históricos–, entra hoy en conflicto con la fuerte estipulación de los plazos y cantidades de la devolución (Guyer, 2012) y con una negación de la posibilidad del impago que legitima el ejercicio de la violencia –explícita o simbólica– contra los morosos (Graeber, 2011).

Ante esta problemática, en el presente artículo analizaremos en qué medida en la práctica de la reciprocidad y la solidaridad por parte de los deudores hipotecarios, tanto en el ámbito de las estrategias domésticas como de cara a la articulación de formas de acción colectiva, se halla implícito un cuestionamiento de la obligación de devolver las deudas o, por el contrario, tales prácticas van simplemente encaminadas a seguir cumpliendo en lo posible con las obligaciones financieras contraídas. Para responder a estas cuestiones pondremos en diálogo las visiones teóricas de la Antropología y otras disciplinas afines con la información recopilada durante una

1 Según el el Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2012 se iniciaron 415.117 procedimientos de ejecución hipotecaria (Observatori DESC 2013).

investigación etnográfica entre los sectores sociales más vulnerables a las ejecuciones hipotecarias en el área de Barcelona².

2 Relaciones de deuda y crédito en el capitalismo contemporáneo

Con base en la preocupación de la Antropología clásica por las relaciones entre donadores y receptores y por los significados culturales y valores morales atribuidos a sus respectivas posiciones sociales (Mauss, 1979), en los últimos años ha aparecido un interés renovado por las relaciones de deuda y crédito en las economías contemporáneas (Peebles, 2010), en conexión con los debates sociales suscitados por la crisis financiera y por los conflictos a que se enfrentan los grupos domésticos, las empresas y los Estados que se ven incapaces de devolver sus deudas. El endeudamiento, según se afirma, se ha convertido en la condición primordial de los actores económicos bajo el capitalismo contemporáneo (Lazzarato, 2011). El volumen de Graeber sobre la antropología de la deuda (2011) ha contribuido a iluminar los fundamentos morales de la obligación de devolver las deudas monetarias, como también a desvelar la naturalización de las responsabilidades de los deudores en los contextos capitalistas. Como demuestra su examen histórico de las relaciones de crédito, el riesgo de que ciertas deudas no sean pagadas ha sido tradicionalmente asumido por los sistemas sociales. En contraste con ello, en el marco capitalista, el ritmo y las condiciones de la devolución son estrictamente cuantificadas (Guyer, 2012) como resultado de la conversión del dinero en mercancía (Polanyi, 2001), y la posibilidad del impago parece estar ausente de las representaciones sociales o, de verse representada, lo hace vinculada al estigma y la exclusión social. Como resultado de esta situación, la violencia sobre los deudores se ve legitimada (Graeber, 2011), y se justifica la retirada del Estado de la provisión de bienestar (Lazzarato, 2011). El debate también se centra en las evaluaciones morales de la deuda y el crédito, y de los propios deudores y acreedores (Gregory, 2012), en interrelación con los efectos materiales de la práctica del crédito (Peebles, 2010).

Todas estas contribuciones serán útiles para dar cuenta de la situación de los deudores hipotecarios españoles que están transgrediendo masivamente la obligación – legal y moral – de devolver sus préstamos tras el final de la burbuja inmobiliaria en 2007 (Naredo, 2009). Hasta aquel momento, muchos préstamos habían sido concedidos pese

-
- 2 Nuestros informantes son en gran parte miembros de la asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde estamos realizando trabajo de campo etnográfico desde marzo de 2012. No obstante, las vicisitudes de la investigación nos han llevado a ampliar la mirada hacia el resto del área metropolitana de Barcelona, así como a entrevistar a otros actores implicados en el fenómeno del endeudamiento hipotecario, como empleados de entidades crediticias o expertos en los campos jurídico y financiero. El artículo constituye una presentación de algunos resultados provisionales de la etnografía aún en curso.

al alto riesgo de insolvencia de los deudores. La observación de Gregory (2012) sobre las hipotecas *sub-prime* puede aplicarse aquí: cuando se concedieron esas hipotecas, convirtiendo el crédito –con sus connotaciones positivas– en deuda –con su carga negativa– para amplias capas de la población española, se subvirtió la secuencia usual de la acción: no fueron los prestatarios, sino los creditores, quienes iniciaron el proceso al ofrecer crédito agresivamente. El complejo funcionamiento de los derivados financieros, por los que las deudas se convierten en objetos de inversión (Moulier-Boutang, 2012) en el marco de un proceso de financiarización particularmente invasivo (Marazzi, 2009), a su vez propiciado por la desregulación del mercado hipotecario (Nasarre, 2011) y por determinadas políticas pro-ciclo (López, Rodríguez, 2010), explica en buena medida este afán de entidades bancarias y mediadores inmobiliarios por vender productos financieros con independencia de las probabilidades de devolución.

3 El acceso a la propiedad durante la burbuja inmobiliaria

Durante la burbuja inmobiliaria experimentada recientemente en España, existía un considerable consenso social acerca de las ventajas de la vivienda de propiedad respecto a otras formas de tenencia³. En efecto, una multiplicidad de actores sociales entendían que la compra de una vivienda era la opción que mejor podía responder a las necesidades y aspiraciones de las unidades domésticas, de cara a la consecución de una vivienda adecuada y al atesoramiento de un patrimonio familiar transmisible a las generaciones futuras. Asimismo, la accesibilidad de los préstamos hipotecarios y los incentivos fiscales reforzaban la tendencia creciente al sobreendeudamiento (Defensor del Pueblo, 2012), presentándolo como un sacrificio asumible y necesario, especialmente en las primeras etapas del ciclo doméstico. Esta inclinación a la compra de la vivienda puede interpretarse, como vemos a continuación, en varios sentidos.

3.1 Cálculo, inversión y endeudamiento

Los discursos dominantes, inspirados en la teoría económica neoclásica, tienden a construir a los actores económicos, en este caso los consumidores de vivienda, como agentes libres e individuales que en su día se hallaron ante la posibilidad de escoger entre distintas opciones ofrecidas por el mercado. Con reflexiones como «nadie nos puso una pistola en la cabeza para firmar el préstamo», frecuentemente evocadas en las conversaciones entre deudores hipotecarios que hoy se enfrentan a dificultades,

3 Esta preferencia se sitúa en línea con los discursos técnico-científicos que han legitimado la implementación de políticas neoliberales en el ámbito de la provisión habitacional (Saunders, 1986; Warde 1990).

se suscita la cuestión de la libre determinación del comportamiento económico y la atribución de responsabilidad individual, resultando en la culpabilización de las propias víctimas del proceso (King, 2006). Tal conceptualización del consumidor como *homo oeconomicus* pasa por alto aspectos como la sujeción de las prácticas de consumo a las disposiciones de los actores, entendidas como dispositivos más o menos inconscientes que guían la acción económica en función de su posición relativa dentro de la estructura del capital, así como el papel de las prácticas de consumo en la generación de distinción y estratificación social (Bourdieu, 1988) y los procesos de emulación dentro de y entre grupos sociales (Mintz, 1996). También las obligaciones mutuas impuestas por las relaciones de reciprocidad y los patrones de circulación informal de recursos en que los actores económicos están inmersos (Stack, 1974; Lomnitz, 1975) y la economía política de los sistemas de aprovisionamiento (Carrier, Heyman, 1997; Narotzky, 2007; Sabaté, 2012) quedan inexplorados desde una concepción individualista del consumo.

No se trata de descartar de entrada que en la génesis de la opción de consumo por la vivienda de propiedad se produzca una «acción calculadora» (Appadurai, 2012) por parte de los consumidores, guiada por unas expectativas de mejora de las condiciones de vida material. Tal cálculo no sólo incluiría datos fácilmente objetivables, como los ingresos presentes y sus perspectivas de estabilidad futura (por ejemplo el carácter permanente o eventual de los contratos laborales), sino también otras potenciales fuentes de soporte financiero, como el subalquiler que pudiera cobrarse por habitaciones, la remuneración del trabajo informal, la ayuda monetaria directa que circularía a través de redes de apoyo familiar, o, eventualmente, el ingreso que pudiera obtenerse de la venta de la vivienda. El grado en que cada una de estas fuentes de ayuda financiera se entendía como un último recurso o ya de entrada como un apoyo imprescindible para el pago de la entrada o la devolución de las cuotas hipotecarias podía variar según los casos. Un repaso de estas variables explican en buena medida las condiciones en que muchos grupos domésticos accedieron a convertirse en deudores hipotecarios.

Pero hay que tener en cuenta también que la decisión de comprar por parte de los consumidores se producía en una situación de falta de transparencia y de asimetría en el acceso a información técnica y conocimiento experto (Contreras, 2013a) a la hora de firmar los contratos de préstamo hipotecario. Muchos compradores ignoraban sus derechos y obligaciones legales, las implicaciones específicas de las cláusulas contractuales, o las variables macroeconómicas, como la evolución de los tipos de interés, que influirían directamente en el cálculo de las cuotas. Junto a esto, existía también una considerable falta de control sobre la evolución de la situación económica futura, por ejemplo en relación con la disponibilidad de empleo y, por tanto, con la

continuidad del nivel de ingresos. En ocasiones, a todo ello se añadía la ocultación activa de información relevante por parte del agente bancario o el mediador inmobiliario, a veces hasta el extremo del engaño. Así ocurría, por ejemplo, cuando se minimizaban las implicaciones de la condición de avalista, cuando se hacían falsas promesas de eliminar los avales en el futuro, cuando se acababa incluyendo a ciertas personas como copropietarias cuando de entrada sólo se habían ofrecido a ser avalistas, o cuando se incitaba a la práctica de los avales cruzados, en ocasiones entre desconocidos, bajo la apariencia de un trato favorable para todas las partes.

El cálculo y la toma de decisiones, pues, se producían sobre la base de unas concepciones *folk*, más vinculadas a la práctica inmediata que basadas en conocimientos técnicos, que a menudo se veían inspiradas por los propios interlocutores expertos con los que los consumidores topaban en las oficinas bancarias y agencias inmobiliarias (Bourdieu, 2001). En este contexto aparecía recurrentemente, por ejemplo, una comparación muy simplificada entre la condición de inquilino y la de propietario con una deuda hipotecaria, según la cual el pago de un alquiler resultaba desventajoso frente a la posibilidad de poder invertir supuestamente las mismas cantidades en el acceso a la condición propietario de un patrimonio inmobiliario. También se promovía la creencia en la revalorización ilimitada de los inmuebles, y en la consiguiente facilidad para vender cuando se deseara. Entraban en juego, así, dos concepciones potencialmente contradictorias de las viviendas, en términos de valor de uso y de valor de cambio, de la mano de la tensión entre su interpretación como un recurso básico o como un objeto de inversión especulativa⁴.

Así pues, la decisión de endeudarse contextualizada en el marco de unas relaciones de poder desiguales y de unas determinadas disposiciones de los actores, se traduce en el hecho de que los contratos de préstamo hipotecario acabaran firmándose «bajo coacción» (Bourdieu, 2001). Esto puede invalidar la acusación de irracionalidad arrojada contra los hogares hoy sobreendeudados o incapaces de satisfacer el pago de las cuotas (Contreras, 2013b). Tal reproche contribuye al proyecto de legitimar y naturalizar los efectos de la actual crisis económica, con una atribución de responsabilidad a los deudores en términos de culpa, obviando otra posible atribución, en términos de tarea (King, 2006), a las autoridades públicas. Estas, no obstante, son quienes que en principio habrían de garantizar el acceso a una vivienda adecuada por parte de la ciudadanía, independientemente de la coyuntura macroeconómica, tal y como se contempla en distintos textos legales (Oderzo, 2001; Pisarello, Observatori DESC, 2003; Rolnik 2012), incluida la Constitución Española de 1978.

4 Esto ocurría aun en el caso de la compra de una primera vivienda, que a menudo se presentaba y concebía como una inversión en términos capitalistas, cuando difícilmente podía responder a esa definición por estar ante todo al servicio de la satisfacción de una necesidad habitacional (Engels, 1974).

La acusación de irracionalidad a los deudores coexiste en la actualidad con otros argumentos afines. Así, por ejemplo, no es inusual que los propios sobreendeudados se culpen hoy de «haber vivido por encima de sus posibilidades», cuando en realidad su ingreso en la condición de deudores hipotecarios fue en sí mismo un objetivo de la industria financiera, para quien la creación de un mercado hipotecario *subprime* permitió incorporar a los más pobres a las dinámicas de acumulación del capital financiero de las que anteriormente habían estado excluidos (Rolnik, 2013). En tiempos de burbuja inmobiliaria, el crédito se presentaba como un elemento eminentemente positivo (Gregory, 2012), ligado a la prosperidad, al crecimiento económico y a la expansión del consumo, aspiraciones todas ellas ampliamente compartidas dentro de la sociedad⁵. En estas circunstancias de gran accesibilidad del crédito, se producía una competición feroz entre las entidades proveedores de crédito, una gran presión hacia la productividad sobre los empleados de banca, y una proliferación de intermediarios en busca del lucro en el mercado inmobiliario.

En el momento de la concesión de los préstamos, el concepto de solvencia perdía relevancia para los credidores, en buena medida debido a la transferencia de riesgos y responsabilidades entre las entidades bancarias de primera fila y el mercado financiero secundario donde las hipotecas se empaquetaban y comercializaban en forma de derivados (Nasarre, 2011). De este modo, los intereses financieros constreñían también –de forma tan velada como directa– el comportamiento de consumo.

Todo apunta pues a que, en los tiempos de la burbuja, las condiciones de posibilidad del comportamiento de consumo habitacional empujaban al endeudamiento hipotecario. Esta aseveración no tiene por qué contradecir la interpretación de la acción de endeudarse en términos de una cierta racionalidad, siempre que esta se enmarque en las disposiciones del *habitus* (Bourdieu, 2001).

3.2 Explicaciones culturalistas

Los juicios acerca de la racionalidad o irracionalidad del endeudamiento coexisten con otras explicaciones del predominio de la vivienda de propiedad que, en lugar de cargar las tintas sobre la elección, y en consecuencia sobre la responsabilidad individual, ponen todo el énfasis en variables de tipo cultural. Se presupone, según esto, que existe en el Estado español una «cultura de la propiedad» que predispone a los ciudadanos a preferir y optar por la compra de la vivienda frente a la opción del alquiler. Tales ideas se inscriben en un discurso hegemónico que naturaliza y des-historiza un fenómeno

5 A ello venían a sumarse las experiencias de discriminación y las malas condiciones de habitación ofrecidas por el parque de viviendas de alquiler.

relativamente reciente, oscureciendo las condiciones estructurales que han contribuido a popularizar esta forma de tenencia. Unas condiciones que están presentes en varios países del Sur de Europa, pero que tienen su versión más exagerada en el caso español (Allen et al., 2004).

Dejando de lado el hecho de que esta explicación cultural difícilmente daría cuenta de la incorporación masiva a la condición de deudores hipotecarios de los migrantes recientemente llegados al país, el argumento descuida las políticas explícitamente encaminadas, ya desde el franquismo, a la conversión de la mayoría social a la condición de propietarios, por ejemplo mediante la regulación del uso del suelo, los subsidios a la promoción y construcción residencial, la incentivación fiscal de la compra (López, Rodríguez, 2010; Naredo, Montiel, 2011), la desprotección legal de los arrendatarios, la desregulación del mercado financiero (Nasarre, 2011), así como ciertos aspectos de los convenios migratorios internacionales que también han contribuido en esa dirección. Además de todas estas cuestiones, la explicación culturalista también pierde de vista el papel de las redes familiares que vehiculan la circulación de recursos e intervienen decisivamente en las trayectorias habitacionales de los grupos domésticos. Por todo ello, tal y como sugieren Allen et al. (2004), la llamada «cultura de la propiedad» ha de verse más como resultado de unas condiciones objetivas, cuando estas se perpetúan en el tiempo, que como causa del predominio de ese tipo de tenencia en términos estadísticos.

Eso no significa, no obstante, que los factores de carácter material excluyan otros elementos de tipo simbólico que pueden redundar en la preferencia social por la vivienda de propiedad en un momento histórico dado. Entre ellos podríamos encontrar la centralidad del patrimonio inmobiliario dentro de los proyectos domésticos, el papel de la propiedad como elemento de arraigo en una localidad, en especial para los migrantes, así como la inserción de esta forma de tenencia en el campo a la vez simbólico y material de las solidaridades familiares y sociales.

Así pues, en los años de la burbuja inmobiliaria, todo parecía contribuir a un compromiso tácito entre los distintos actores implicados (autoridades, expertos, entidades financieras, ciudadanos ...) acerca de la estabilidad y deseabilidad de la condición de propietarios, así como de la normalización de la condición del sujeto endeudado (Lazaratto, 2011).

Partimos, pues, de una aparente coincidencia entre las prescripciones derivadas de los modelos económicos hegemónicos y los principios que guiaban las prácticas económicas cotidianas de amplias capas de la población. Tal coincidencia, según mostraremos, se vería perturbada en los años que siguieron.

4 Crisis económica, sobreendeudamiento y transgresión de principios morales

El consenso social acerca de la deseabilidad de la vivienda de propiedad, con sus implicaciones en términos de endeudamiento, se fue viendo cuestionado a medida que los efectos de la crisis financiera e inmobiliaria iban haciéndose notar. Con la subida de los tipos de interés sumada al desempleo masivo, seguido después del agotamiento de prestaciones y subsidios, muchas unidades domésticas se vieron ante la imposibilidad de hacer frente a sus cuotas y, en consecuencia, ante la amenaza de la pérdida de la vivienda. Una pérdida que, según una peculiaridad de la legislación hipotecaria española que aplica el principio de la responsabilidad patrimonial universal (Defensor del Pueblo, 2012), no obliga a dar por saldada la deuda, sino que puede perpetuar a los deudores en su condición, atribuyéndoles la cantidad de deuda no cubierta mediante la subasta de la vivienda. El endeudamiento se revela como especialmente insostenible en tales casos, aunque, de forma más velada, también pesa sobre aquellas economías domésticas que, mediante grandes esfuerzos, van logrando eludir la morosidad.

En estas circunstancias, sostenemos que los afectados por la morosidad hipotecaria, junto con los sobreendeudados en general y un importante sector social que se suma a su malestar, han visto transgredidos una serie de principios morales.

Uno de ellos correspondería a la compensación, en forma de bienestar material, por el esfuerzo y el sacrificio. Quizá algunas de las manifestaciones más extremas de esto sean las que se producen cuando los bancos reclaman las propiedades de los avaladores que ya habían acabado de pagar su vivienda. Este fue el caso de JL, miembro activo de la PAH a quien el banco exigía responder con su vivienda ya pagada por la hipoteca en mora de su hijo. JL y su esposa protagonizaron una protesta frente a la oficina bancaria, situada en el centro de Barcelona, que procuró una considerable visibilidad mediática a su caso y, finalmente, se resolvió con la cancelación de su responsabilidad como avalistas.

En un sentido similar, el concepto de sueldo inembargable, que incluye un mínimo ampliable en función del número de familiares dependientes, puede entenderse como un límite legal que señalaría también un principio moral: la garantía universal de unos mínimos para vivir a pesar de las deudas. En efecto, en el asesoramiento colectivo de la PAH, los miembros más experimentados ponen empeño en hacer conscientes a los nuevos integrantes de su derecho a este ingreso mínimo que garantiza el sustento más allá del endeudamiento. Un derecho que en ocasiones se ve transgredido por las propias entidades bancarias, como ocurría en el caso de V. cuando acudió por primera vez a la PAH: el banco le estaba embargando mensualmente la práctica totalidad de la nómina.

En el momento en que una hipoteca entra en mora, el procedimiento de ejecución suele desencadenarse independientemente de la situación y especificidades de los deudores, sin tener en cuenta el esfuerzo ya invertido por estos en devolver las cuotas hipotecarias. Algunos deudores pasan meses ingresando importes inferiores a una cuota completa, en un intento de mostrar al banco su voluntad de mantenerse al día en lo posible, para descubrir luego que esas cantidades no tienen utilidad de cara a una flexibilización de las condiciones de devolución o a la apertura de una vía de negociación. Cuando el impago es inminente o ya un hecho consumado, el creditor tiende a mostrarse indiferente ante toda la variabilidad de las situaciones de mora. Esto se percibe como una desproporción entre el esfuerzo y sus resultados, y una falta de consideración hacia una posible categoría de morosos hipotecarios que lo serían en contra de su voluntad, debido a factores que escapan a su control, como el desempleo: los «deudores de buena fe» (Defensor del Pueblo, 2012, 9).

Las situaciones descritas hasta aquí tienen en común la suspensión de la proporcionalidad entre lo dado y lo recibido, entre el esfuerzo y su compensación. Una proporcionalidad que sí parecían tener en cuenta los compradores al decidirse a contraer la deuda para, mediante un sacrificio proporcional a la cantidad prestada, acceder a la propiedad de una vivienda.

Otro principio moral que parece haberse violentado tiene que ver con la priorización de la satisfacción de las necesidades básicas –como la alimentación o el vestido– sobre las obligaciones de tipo financiero –como la devolución de los préstamos. Esta idea emerge con especial vigor cuando peligra el sustento de las personas dependientes, en particular de los hijos: muchos afectados lo plantean como su prioridad absoluta. En efecto, una vez se ha incurrido en el impago de la hipoteca, una situación que por lo general se ha intentado evitar por todos los medios, atendiendo durante meses el pago de las cuotas con preferencia sobre otros gastos, se observa una reorganización de la jerarquía de necesidades y obligaciones que han de ser atendidas. En dicha jerarquía, las cuotas hipotecarias quedan muy relegadas, cuando no directamente excluidas⁶. Sobre todo en los casos en que ya se ha perdido la vivienda, al desvincularse de la satisfacción de la necesidad básica de cobijo, la obligación de devolver el préstamo hipotecario pasa a entenderse como un requerimiento meramente financiero, desvinculado ya del disfrute del recurso que originó la deuda, y por tanto legítimamente eludible.

Por otra parte, la experiencia de los afectados por las ejecuciones hipotecarias está marcada por la negación de otro principio moral: el derecho a una segunda

6 Obsérvese que este tipo de situaciones pueden leerse, nuevamente, en términos de elección racional: se trata de una elección en un contexto de medios escasos y fines alternativos, que, no obstante, no tiene lugar en un marco de libertad de acción, sino en el de unas condiciones de posibilidad muy estrechas.

oportunidad por parte de quienes no han podido afrontar las consecuencias del sobreendeudamiento. En este sentido, la dación en pago, o la condonación de la deuda cuando ya se ha producido el lanzamiento de la vivienda, representarían esa segunda oportunidad, mientras que la perpetuación de la condición de moroso supondría la negación de la misma, tanto en términos meramente económicos –cuando el hecho de figurar en listas de morosos cierra el acceso a otra vivienda entre otros recursos (Defensor del Pueblo, 2012)– como en términos sociales –con la estigmatización e invisibilización de los morosos hipotecarios. Sin embargo, la regulación deficiente de estas figuras y supuestos en la legislación vigente (Nasarre, 2011) hace que su concesión dependa de los casos particulares, con lo que sólo resultan accesibles para aquellos con más fortuna o audacia en la negociación individual con la entidad creditora.

Por último, en el contexto de una determinada representación de las funciones de los poderes públicos, como la vinculada a la versión hispana del Estado de bienestar, puede afirmarse que también se ha roto un principio moral asociado a la atribución a las autoridades de cierta responsabilidad pública en relación con el sustento de los ciudadanos. Tal principio incluiría una priorización del bien común y del bienestar ciudadano por encima de los intereses empresariales particulares. En la coyuntura actual, con la multiplicación de medidas como los rescates y nacionalizaciones de la banca, los afectados por las ejecuciones hipotecarias identifican un solapamiento casi total entre los intereses de la clase política y los de las élites económicas. Una vez agotadas prestaciones y subsidios, el acceso a recursos materiales ya sólo se ve facilitado por organizaciones caritativas o por ciertas iniciativas de circulación y recolecta –por ejemplo de ropa o alimentos– promovidas por los propios deudores hipotecarios.

5 Ante el endeudamiento

El endeudamiento hipotecario ejerce una considerable presión sobre las economías domésticas, al tiempo que amenaza o condiciona fuertemente los proyectos vitales de las personas implicadas. El impacto del fenómeno abarca tanto los aspectos materiales más directamente ligados a la obtención del sustento como otros procesos de carácter social y político ligados a la generación de desigualdad, exclusión o subordinación. Los endeudados, en consecuencia, se ven en la necesidad de adoptar estrategias que les permitan asegurar la supervivencia y la reproducción doméstica. En ocasiones, además, su comportamiento puede ir encaminado a alcanzar transformaciones de mayor alcance que permitan una mejora de su situación.

A continuación consideramos las estrategias domésticas y las formas de acción colectiva que han emergido en los últimos años ante las situaciones de endeudamiento.

5.1 Estrategias domésticas

En la escala doméstica, las estrategias adoptadas por los afectados incluyen, por un lado, toda una serie de prácticas centradas en la reciprocidad y la ayuda mutua entre personas unidas por lazos de obligación moral. A través de esos lazos circulan préstamos monetarios y también prestaciones en especie, por ejemplo en forma de provisión temporal o permanente de alojamiento. Así ocurrió, por ejemplo, cuando C. y su familia tuvieron que abandonar su vivienda tras la obtención de la dación en pago. Tres miembros de la familia (los padres y el hijo menor) fueron acogidos gratuitamente en casa de otro afectado con el que habían estrechado lazos y multiplicado la práctica de la ayuda mutua durante sus meses de activismo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El énfasis en la reciprocidad, sin embargo, no debe llevarnos a obviar la circulación mercantil de recursos, ya sea formal o informal. Así, por ejemplo, R. y A., que habían contraído simultáneamente dos hipotecas por la primera y la segunda vivienda, lograron salir del apuro en el que se encontraban al quedar ambos desempleados cuando localizaron un comprador para la segunda residencia. Por su parte, desde que perdió el empleo, F. ha ido vendiendo su automóvil y otros objetos de valor, Y en un sentido similar, V. optó por poner en alquiler la propia vivienda hipotecada⁷ e instalarse en casa de sus padres con sus dos hijos. Por supuesto, también es usual el recurso al trabajo sumergido, por ejemplo en el ámbito del trabajo doméstico, como también los intentos de obtener algún lucro de alguna actividad que ya se realizaba anteriormente. Tal fue el caso también de R., que buscó sin éxito una salida en el auto-empleo como artesana, sin por ello cerrarse a la posibilidad de un empleo en su ámbito profesional anterior.

Con todas estas estrategias de carácter mercantil, ya sea formal o informal, los deudores hipotecarios que ven disminuir drásticamente su capacidad económica obtienen un ingreso con el que satisfacer al menos las próximas cuotas, postponiendo en lo posible la situación de mora, a la espera de que conseguir un empleo entre tanto.

Junto a la búsqueda de ingresos por distintos medios, los deudores hipotecarios, ya desde el momento en que empiezan a prever la imposibilidad de satisfacer las cuotas a varios meses vista, imponen medidas de austeridad en sus economías domésticas, con la renuncia a determinados consumos o la opción por variantes más económicas. Los propios R. y A., por ejemplo, se plantearon dar de baja a su hijo menor de la guardería pública a la que asistía, bajo la premisa de que aquel era un gasto prescindible. Su idea era asumir el cuidado del niño durante toda la jornada

⁷ El alquiler de la vivienda hipotecada, de hecho, puede funcionar como fuente de ingresos, o también, en algunos casos, como parte de una táctica legal encaminada a tratar de retrasar el desahucio.

hasta poder matricularlo, pocos meses más tarde, en el segundo ciclo de la educación infantil, ya de carácter gratuito⁸.

Conviene tener presente, no obstante, que las estas estrategias domésticas relacionadas con el acceso a recursos materiales no sólo tienen peso en tiempos de adversidad económica. Por el contrario, buena parte de ellas se practican también, con las adaptaciones pertinentes, durante las épocas de prosperidad. Por ejemplo, muchos deudores hipotecarios afirman que ya en el momento de contratar el préstamo hipotecario contaban con realquilar alguna habitación de la vivienda para aligerar el peso de las cuotas mensuales, una estrategia que les permitía optar a pisos de mayor precio y tamaño. Aplicaban así, ya de entrada, una estrategia que había de aumentar los ingresos de la unidad doméstica mediante la participación en el mercado del realquiler.

En el ámbito de las reciprocidades encontramos también ejemplos ilustrativos. Cuando un familiar o amigo se prestaba a ser avalista de un préstamo hipotecario, o incluso a figurar como copropietario para sumar su solvencia a la del auténtico comprador, se producía una formalización de unos vínculos recíprocos de mutua obligación que preexistían a la relación contractual⁹. El resultado, como más tarde se ha revelado con claridad, es la conversión de las propias relaciones sociales en activos susceptibles de depredación financiera por parte del creditor, lo que ocurre a partir del momento en que la hipoteca entra en mora y el banco reclama la cantidad debida a propietarios y avalistas. Los contratos de préstamo hipotecario pueden interpretarse, pues, como la objetivación de unas relaciones sociales subyacentes que tienen la potencialidad de canalizar recursos desde el deudor y su entorno hacia la entidad bancaria¹⁰. En caso de determinados conflictos que truncan el lazo social, la función de las relaciones sociales como sustrato para la circulación económica puede quedar en entredicho. Así ocurrió, por ejemplo, cuando la pareja de M. se marchó de casa, volviéndose a Ecuador y evitando así sus responsabilidades financieras como copropietario de la vivienda. Mientras le fue posible, M. siguió pagando con esfuerzo las cuotas hipotecarias, hasta que la situación se le hizo insostenible y entró en mora. La entidad bancaria no dispone, al menos de momento, de herramientas para ejercer reclamaciones sobre el propietario ausente del país, como tampoco M. encontró en su día la manera de obligarle a colaborar con los pagos o buscar alguna solución alternativa.

8 Finalmente no tuvieron que recurrir a ello, ya que desde la guardería se les pudo ofrecer una beca que disminuía considerablemente las mensualidades.

9 Hay, sin embargo, una salvedad: en ocasiones los avales no reflejaban relaciones preexistentes, sino que se producían entre desconocidos o semidesconocidos que entraban en contacto a través de los propios agentes inmobiliarios o bancarios y en algunos casos se avalaban mutuamente.

10 Nótese la coincidencia de esta idea con la noción de capital social (Bourdieu, 1980).

5.2 La emergencia de la acción colectiva

Paralelamente al despliegue de este repertorio de prácticas por parte de los grupos domésticos y sus redes sociales, el malestar provocado por la ola de ejecuciones hipotecarias ha dado pie a la emergencia de un movimiento social que ha convertido a los deudores hipotecarios en un nuevo sujeto político. Se trata de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que, desde su aparición en Barcelona en 2009, se ha extendido por todo el Estado con la fundación de más de 160 asambleas locales.

Quizá la cara más visible de la Plataforma sean sus convocatorias para detener los desahucios, mediante una práctica de desobediencia civil que impide físicamente la acción de policías y representantes judiciales en el momento y lugar del lanzamiento. No obstante, sus actividades son mucho más variadas (Mir et al., 2013; Colau, Alemany, 2012). Las reuniones periódicas de los grupos locales cumplen, en primer lugar, una función de apoyo mutuo, brindando a los afectados una oportunidad para expresar sus preocupaciones y superar su aislamiento, al tiempo que toman conciencia de la dimensión colectiva de su problema y en muchos casos revierten procesos de auto-inculpación, pasando a atribuir responsabilidades de diversos tipos a actores con los que los deudores mantienen una relación de poder desigual, como la banca o las autoridades públicas. Las asambleas devienen así un espacio de empoderamiento frente al aislamiento y el estigma social, y sirven también para la detección de necesidades tanto materiales como psicológicas en los participantes.

En segundo lugar, la PAH vehicula formas de asesoramiento colectivo que por lo general es ejercido por los miembros con más experiencia y, en algunos casos, por profesionales –sobre todo juristas– que prestan sus servicios de forma voluntaria. De este modo se pretende difundir el conocimiento experto relevante para enfrentarse a cada situación particular, en función de si se está en la fase previa a dejar de pagar las cuotas hipotecarias, ya en situación de impago y ante la perspectiva del lanzamiento, o bien, tras la pérdida de la vivienda, en el trance de afrontar el peso del endeudamiento mientras se busca un alojamiento alternativo. La finalidad del asesoramiento colectivo es, en definitiva, promover la agencia de los afectados y dotarles de herramientas que palién en lo posible su desvalimiento ante unos interlocutores –como los agentes bancarios o los funcionarios públicos– que acaparan el conocimiento experto sobre las leyes, las finanzas y los resortes burocráticos de la asistencia social. Junto con estas prácticas de asesoramiento, los miembros con trayectoria más larga dentro de cada asamblea local acompañan a los deudores durante sus negociaciones con los bancos y otras instituciones implicadas.

En tercer lugar, la PAH promueve el compromiso político mediante la organización de luchas colectivas a distintas escalas. Forma parte de los objetivos de la Plataforma la promoción de cambios políticos y legislativos, mediante la influencia en la opinión pública y exigiendo la intervención de legisladores, jueces y otras autoridades públicas. Así, en 2013 se llevó al Congreso de los Diputados, mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), una propuesta de modificación legal que regulaba la dación en pago, la condonación de las deudas para las familias ya desahuciadas, y la provisión de viviendas de alquiler social (Colau, Alemany, 2012). Durante el trámite parlamentario, además, se desarrolló una polémica campaña que pretendía persuadir a diputados específicos para que votaran a favor de la propuesta. En los llamados *escraches*, los políticos eran interpelados en los espacios públicos donde desarrollan sus actividades cotidianas extra-profesionales. Finalmente la ILP, apoyada por más de medio millón de firmas recogidas por todo el Estado, no logró su objetivo, pero sí que sirvió para visibilizar el enorme apoyo popular a este tipo de medidas. También en el ámbito legislativo, la PAH está promoviendo la aprobación de mociones municipales para la penalización económica de los pisos vacíos que se encuentran en manos de entidades bancarias. Junto a esto, se organizan también movilizaciones contra determinados bancos que tienen un especial protagonismo en la multiplicación de las ejecuciones hipotecarias. Esta presión ha dado cierto fruto en algunos casos: algunas entidades han accedido a negociar con la PAH una solución colectiva para todos sus clientes, si bien tal solución aún no ha sido alcanzada. Asimismo, aunque este aspecto resulta menos visible, algunos bancos y cajas de ahorros han establecido protocolos de respuesta a las reivindicaciones de aquellos clientes que se presentan con el apoyo de la PAH, haciéndoles concesiones como la oferta de lo que puede entenderse como una dación en pago de carácter parcial, aceptando que la entrega de la vivienda deje la deuda prácticamente saldada, a falta de una pequeña cantidad de dinero que sigue siendo adeudada. Este tipo de flexibilizaciones, según nos ha hecho saber algún responsable de la banca, responde al temor que las entidades tienen a la mala imagen que la PAH está logrando atribuirles.

Por otro lado, además de todas estas movilizaciones encaminadas a solucionar el problema principal que lleva a las personas a acercarse a la PAH, el endeudamiento hipotecario propiamente dicho, los miembros de la Plataforma muestran también su disposición a movilizarse para la solución de otras dificultades de los afectados, como la imposibilidad de pagar las facturas de suministros o los impuestos que recaen sobre los propietarios de las viviendas, así como otras necesidades económicas básicas, algunas tan urgentes como la alimentación o la provisión de materiales y textos escolares para los hijos. Si bien no es esta su función principal, es muy frecuente que estas demandas afloren y traten de resolverse en la escala local, ya sea mediante la

circulación directa de recursos entre los miembros, mediante el llamamiento a los vecinos que no necesariamente participan en la PAH, o mediante la interlocución con los servicios sociales y entidades caritativas presentes en el municipio.

En cuarto y último lugar, la PAH también ha ideado un mecanismo de provisión habitacional directa para los grupos domésticos ya desahuciados. Para ello se valen de la práctica de la ocupación de viviendas o edificios enteros que se encuentran vacíos y en manos de los bancos. Tal estrategia no es exclusiva de la PAH, sino que también es practicada de manera individual por muchas familias desahuciadas, que vuelven a entrar ilegalmente en sus antiguas viviendas ante la ausencia de alternativas habitacionales. No obstante, en el caso de las ocupaciones colectiva promovidas desde las asambleas de la PAH, e institucionalizadas bajo la etiqueta *Obra Social de la PAH*¹¹, la práctica adquiere un carácter reivindicativo que busca interpelar a las autoridades de cara a la priorización de la función social de la propiedad y al reconocimiento efectivo del derecho constitucional a una vivienda adecuada. Las más conocidas de estas ocupaciones, como la que se produjo en 2013 en un edificio de Sort (Girona), han sido más exitosas en este último sentido, el de visibilizar el problema y exigir una respuesta política, logrando incluso un pronunciamiento favorable del Tribunal de Estrasburgo, que en el de proporcionar un alojamiento estable a las familias, dado el riesgo de desalojo.

6 ¿Hacia una transformación del capitalismo financiero?

En la sección precedente hemos presentado dos grandes tipos de estrategias utilizadas por los deudores hipotecarios ante los riesgos y consecuencias de las ejecuciones.

La literatura antropológica (Lomnitz, 1974; Stack, 1975) viene demostrando que lo que hemos etiquetado como estrategias domésticas, basadas en el recurso a la reciprocidad o a dinámicas de mercado más o menos informal según los casos, no son una particularidad de los tiempos de crisis económica, sino que constituyen la tónica del funcionamiento económico cotidiano en cualquier coyuntura, si bien experimentan ajustes y adaptaciones según se requiera en cada momento la movilización efectiva de recursos o simplemente la conservación de los canales para tal circulación cuando se dé la necesidad. La provisión de alojamiento a un pariente desahuciado sería un ejemplo de lo primero, mientras que la disposición a servir de avalista en el momento de contraer una deuda hipotecaria ilustraría lo segundo. En todo caso, el potencial

11 El nombre alude irónicamente a la «obra social» que los bancos y en especial las cajas de ahorros vienen tradicionalmente presentando como la vertiente social de sus actividades.

transformador de este tipo de prácticas resulta limitado, puesto que consisten en una movilización de recursos que sólo aspiran a seguir cumpliendo en lo posible con las obligaciones financieras contraídas con la entidad de crédito, o, cuando se ha entrado ya en situación de mora, a paliar los impactos negativos que esta pueda tener sobre la reproducción doméstica. No se cuestiona, en este caso, la obligación de devolver los préstamos (Graeber, 2011), como tampoco se pone en duda ni la hegemonía de las valoraciones positivas del papel de las entidades creditoras, ni el juicio moral negativo sobre la condición de los deudores (Gregory, 2012). En definitiva, podemos afirmar que las estrategias domésticas ante el endeudamiento y el sobreendeudamiento constituyen una adaptación a las condiciones cambiantes de la economía de mercado, sin pretender una transformación más estructural.

En segundo lugar, hemos tomado en consideración las modalidades de acción colectiva promovidas por un movimiento social como la PAH. Tales acciones se caracterizan en buena medida por el rechazo de la lógica mercantil, o la reclamación de una regulación estatal de la misma, así como por un énfasis en las solidaridades entre afectados¹². En este caso sí que encontramos una aspiración explícita a la transformación del sistema económico, político y jurídico. Desde su creación, la PAH ha ido cosechando victorias y fracasos en los que se revelan a un tiempo el potencial y las limitaciones de la acción colectiva ante unas relaciones de poder fuertemente establecidas. Las estrategias a medio plazo y a escala intermedia, por ejemplo perjudicando la imagen pública de bancos concretos, difundiendo sentencias judiciales que pueden sentar jurisprudencia o forzando la introducción de medidas políticas en el ámbito municipal, se han revelado como armas poderosas, según admiten los propios destinatarios de la acción –responsables bancarios, juristas o representantes municipales. No obstante, queda pendiente la consecución de transformaciones de mayor alcance, como los cambios legislativos a nivel estatal. Hasta hoy, las regulaciones introducidas por el Gobierno con el fin declarado de paliar el problema de los desahucios han sido muy tímidas¹³, lo que deja patente la poca disposición de las autoridades a regular de manera efectiva el impacto de los ciclos macroeconómicos sobre la obtención del sustento por parte de los ciudadanos.

Con todo, en buena medida a raíz de la acción de la PAH, los «afectados por la hipoteca» se han convertido en un actor social y político que ha superado una situación anterior de invisibilidad y estigmatización. Su presencia pública reconocible,

12 Solidaridades a las que se suman activistas y algunos profesionales -por ejemplo juristas- que prestan algún servicio voluntario a la organización.

13 Quizá el caso más notable es el del llamado Decreto De Guindos, que se presentó como una regulación de la dación en pago pero no pasó de ser en realidad una recomendación no vinculante de «buenas prácticas» a las entidades bancarias. Tuvo incluso el efecto de legitimar la no concesión de la dación a una inmensa mayoría de deudores que no cumplían los requisitos recogidos en el Decreto.

tanto en las calles como en los medios de comunicación, les da fuerza a la hora de la negociación. Esto se debe, en buena medida, al hecho de que sus acciones no se limitan a la provisión de recursos que palien el impacto del sobreendeudamiento o la pérdida de la vivienda para grupos domésticos concretos. Las relaciones de reciprocidad y solidaridad que emergen en su seno alcanzan también el plano colectivo de la lucha política, con la aspiración de promover una transformación estructural tanto en referencia al marco legal, como a la representación social del endeudamiento. Así, mediante la denuncia de la violencia estructural y simbólica que el sistema ejerce sobre los morosos hipotecarios, se logra cuestionar la obligación misma de devolver las deudas cuando estas son socialmente reconocidas como ilegítimas (Graeber, 2011). Se revierte así, o cuando menos se contrarresta, la concepción positiva de crédito y creditores y la valoración negativa de deuda y deudores (Gregory, 2012), apelando a nociones de justicia y legitimidad, y denunciando las situaciones de abuso, falta de información y transparencia, así como los defectos en la regulación del mercado financiero e hipotecario. Aun en un contexto capitalista, donde la eventualidad del impago había sido sistemáticamente invisibilizada (Graeber, 2011), y donde el ritmo y cantidades de la devolución están estipulados y sancionados al detalle con arreglo a cláusulas contractuales e índices económicos (Guyer, 2012), las situaciones de mora e incluso la condonación de las deudas devienen socialmente pensables.

No obstante, más allá de estas conquistas en el terreno de los discursos y las representaciones sociales, está aún por ver el margen que puede quedar para una transformación efectiva del capitalismo financiero que garantice, aún en tiempos de crisis económica, el sustento material y la reproducción social en condiciones de dignidad.

Bibliografía

- Allen, J. et al., *Housing and welfare in Southern Europe*, Oxford 2004.
- Appadurai, A., The spirit of calculation, *Cambridge Anthropology* 30 (1), 2012, pp. 3-17.
- Bourdieu, P., Le capital social. Notes provisoires, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales* 31, 1980, pp. 2-3.
- Bourdieu, P., *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Madrid 1988.
- Bourdieu, P., *Las estructuras sociales de la economía*, Buenos Aires 2001.
- Carrier, J. C., Heyman, J. McC., Consumption and political economy, *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 3 (2), 1997, pp. 355-373.
- Colau, A., Alemany, A., *Vides hipotecades. De la bombolla immobiliària al dret a l'habitatge*, Barcelona 2012.

- Contreras, E., Cuando el lenguaje experto se erige en obstáculo para el entendimiento. La PAH como comunidad de aprendizaje. Ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Etnografía y Educación, Simposio: «Aprendizaje de la ciudadanía y la participación», Madrid, 3-5 de julio 2013a.
- Contreras, E., ¿Locura o decisión 'racional' y económica? Ponencia presentada en el XI Congreso Español de Sociología, Grupo de Trabajo 31: «Sociología Económica», Madrid, 10-12 de julio 2013b.
- Defensor del Pueblo, *Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo*, 2012, http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Crisis_Hipotecas_2012.pdf [4. 4. 2014].
- Engels, F., *El problema de la vivienda y las grandes ciudades*, Barcelona 1974 [1872].
- Graeber, D., *Debt, The first 5,000 years*, Nueva York 2011.
- Gregory, Ch. A., On money debt and morality: some reflections on the contribution of economic anthropology, *Social Anthropology* 20 (4), 2012, pp. 380-396.
- Guyer, J., Obligation, binding, debt and responsibility: provocations about temporality from two new sources, *Social Anthropology* 20 (4), 2012, pp. 491-501.
- King, P., What do we mean by responsibility? The case of UK housing benefit reform, *Journal of Housing and the Built Environment* 21, 2006, pp. 111-125.
- Lazzarato, M., *The making of the indebted man*, Amsterdam 2011.
- Lomnitz, L., *Cómo sobreviven los marginados*, México 1975.
- López, I., Rodríguez, E., *Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010)*, Madrid 2010.
- Marazzi, Ch., La violencia del capitalismo financiero, en: *La gran crisis de la economía global. Mercados financieros, luchas sociales y nuevos escenarios políticos* (eds. Fumagalli, A. et al.), Madrid 2009.
- Mauss, M., Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas, en: *Sociología y Antropología*, Madrid 1979 [1923-1924].
- Mintz, S., *Dulzura y poder*, México 1996.
- Mir, J. et al., Fundamentos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: activismo, asesoramiento colectivo y desobediencia civil no violenta, *Educación Social* 55, 2013, pp. 52-61.
- Moulier-Boutang, Y., *La abeja y el economista*, Madrid 2012.
- Naredo, J. M., Montiel, A., *El modelo inmobiliario español*, Barcelona 2011.
- Narotzky, S., El lado oculto del consumo, *Cuadernos de Antropología Social* 26, 2007, pp. 21-39.

- Nasarre, S., Malas prácticas bancarias en la actividad hipotecaria, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* 727, 2011, pp. 2665-2737.
- Observatori DESC, *Emergencia habitacional en el Estado Español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de Derechos Humanos*, 2013, <http://observatoridesc.org/sites/default/files/2013-Emergencia-Habitacional.pdf> [4. 4. 2014].
- Oderzo, J-C., Le droit au logement dans les Constitutions des États membres, *Revue internationale de droit comparé* 53 (4), 2001, pp. 913-926.
- Peebles, G., The anthropology of debt and credit, *Annual Review of Anthropology* 39, 2010, pp. 225-240.
- Pisarello, G., Observatori DESC, *Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción*, Barcelona 2003.
- Polanyi, K., *The great transformation. The political and economic origins of our time*, Boston 2001 [1944].
- Rolnik, R., El derecho a una vivienda adecuada. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Asamblea General de las Naciones Unidas, 67º período de sesiones, 10 de agosto 2012.
- Rolnik, R., Late neoliberalism: the financialization of homeownership and housing rights, *International Journal of Urban and Regional Research* 37 (3), 2013, pp. 1058-1066.
- Sabaté, I., *Habitar tras el Muro. La cuestión de la vivienda en el este de Berlín*, Barcelona 2012.
- Saunders, P., *Social theory and the urban question*, Nueva York 1986.
- Stack, C., *All our kin: Strategies for survival in a black community*, Nueva York 1974.
- Warde, A., Production, consumption and social change: reservations regarding Peter Saunders' sociology of consumption, *International Journal of Urban and Regional Research* 14, 1990, pp. 228-248.

Irene Sabaté

Od dežele lastnikov do dežele prezadolženih: recipročnost, solidarnost in načrtovanje sistemskega preoblikovanja v času krize

Ključne besede: prezadolženost, stanovanja, hipotekarne izvršbe, vzajemnost, ekonomska kriza

V Španiji se je zdel med nedavnim nepremičninskim balonom nakup stanovanja najugodnejša strategija za rešitev stanovanjskega problema in obstajal je družbeni konsenz glede potrebe po hipotekarnem zadolževanju. Toda zaradi finančne in nepremičninske krize se je obveznost vračanja posojil množično in neogibno kršila.

Val hipotekarnih izvršb je sovpadel z zaznavanjem zloma moralnih načel, kot so pravična kompenzacija za napor in žrtvovanje, dajanje prednosti zadovoljevanju osnovnih potreb pred finančnimi obveznostmi, možnost druge priložnosti za prezadolžene in odgovornost države, da zagotovi državljanom preživetje.

V takih okoliščinah prizadeti aktivirajo ali okrepijo strategije pretoka sredstev, ki združujejo logiko vzajemnosti in trga. Hkrati je sedanje socialno nelagodje sprožilo družbeno gibanje Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ki usmerja kolektivno delovanje tako v krepitev oblik netržnega pretoka kot v politični pritisk, da bi dosegli zakonske spremembe.

Glede na navedeno se sprašujemo, v kolikšni meri zmorejo strategije, ki jih izvajajo hipotekarni dolžniki, zagotoviti na eni strani domačo reprodukcijo in na drugi preoblikovati same strukture finančnega kapitalizma, ki to reprodukcijo ogrožajo. Trdimo, da potencial strategij proti prezadolževanju temelji na preizpraševanju, ali je vračanje hipotekarnih dolgov obvezno, in na obravnavanju prezadolževanja kot nezakonitega stanja.

Irene Sabaté

From the Land of Homeowners to the Land of the Over-Indebted: Reciprocity, Solidarity and Projects of Systemic Transformation in Times of Crisis

Keywords: over-indebtedness, housing, home repossessions, reciprocity, economic crisis

During the recent housing bubble in Spain, becoming a home owner seemed to be the wisest strategy in order to access housing, and there was considerable social consensus about mortgage indebtedness as a necessary condition in order to attain this goal. However, the obligation to repay loans (Graeber, 2011) has been unavoidably transgressed on a mass scale due to the financial and real-estate crisis.

The wave of home repossessions comes together with the perception of the breaking of moral principles, such as the fair compensation for effort and sacrifice, the prioritisation of basic needs over financial obligations, the availability for a second chance for the over-indebted, or the State's responsibility in guaranteeing a livelihood for its citizens.

Under these circumstances, those affected activate or reinforce strategies for the circulation of resources, based both on reciprocity and market logics. Parallel to this, the current social unrest has led to the emergence of a social movement, the Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), which is articulating collective action aiming at non-market circulation, for example, by promoting mutual support or the dissemination of technical knowledge, and lobbying for legislative changes.

Drawing on these observations, we will consider whether the strategies implemented by mortgage debtors have the potential, on the one hand, to secure domestic reproduction, and, on the other hand, to transform the very structures of financial capitalism that are endangering such reproduction. It will be stated that the transforming potential of strategies coping with mortgage indebtedness is based on the questioning of the obligation to repay, a questioning that emerges in turn from the resignification of over-indebtedness as an illegitimate condition.